



30 AÑOS DE DEMOCRACIA: UN BALANCE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO*

VERÓNICA GIORDANO**

Introducción

Proponemos ofrecer un apretado cuadro que describa el tránsito de tres décadas desde 1983 hasta 2013, en un relato que, despojado de miradas románticas acerca de la continuidad de la institucionalidad democrática como panacea, plantee el escenario sobre el cual proyectar un balance de los alcances y deudas respecto de la igualdad de derechos, en particular la igualdad de género.

Un elemento clave en ese balance es la “desarticulación del campo político”, según sostiene el sociólogo Ricardo Sidicaro, para quien en las tres décadas transcurridas, “peronistas y radicales fueron perdiendo los vínculos de representación social, dejaron de producir debates e ideas acordes con los contextos en que debían actuar y, como expresión extrema, cuando manejaron el gobierno nacional implementaron políticas económicas elaboradas por *think tanks* ajenos a sus tradiciones ideológicas. Los sucesos de finales de 2001 expresaron *la sobredeterminación de las crisis superpuestas, entre las cuales la del sistema de partidos reveló ser la de efectos más persistentes*, ya que la economía nacional se recompuso en un año, los salarios y los niveles de ocupación formales en alrededor de tres años volvieron a sus situaciones anteriores a la crisis, y los paliativos aplicados a la desestructuración social absorbieron sus efectos más disruptivos” (Sidicaro, 2011: 75-76; el subrayado es nuestro).

Dejamos de lado las referencias al desquicio económico y social que acompañó el proceso de desarticulación señalado, no porque las variables de ese orden no sean relevantes –al contrario–, sino simplemente para poner el foco en el funcionamiento de la democracia y la igualdad de género el plano político.

Haciendo este recorte, exploraremos la línea de continuidad que traza Sidicaro desde 1983 (e incluso desde 1974) hasta el presente, porque creemos que la persistencia de la crisis de partidos y la desarticulación del campo político es un factor relevante a la hora de evaluar los avances y las deudas de la democracia en relación con la igualdad de derechos, y en particular la igualdad de derechos entre varones y mujeres.

La estabilidad democrática en cuestión

Como hemos afirmado en otro lado (Ansaldi y Giordano, 2012: 501-510), desde el acto electoral que definió la transición de la dictadura a la democracia en octubre de 1983, han transcurrido treinta años, lapso durante el cual Argentina –y América Latina– ha sostenido una singular etapa –para la mayoría de los países latinoamericanos, sin precedentes– de continuidad jurídico-política del régimen democrático. Empero, continuidad jurídico-política no ha sido sinónimo

* Este trabajo se desprende una investigación más amplia cuyos resultados se publicaron en Giordano (2012).

** Investigadora Adjunta del CONICET, integra el Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina (GESHAL), con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), Facultad de Ciencias Sociales, UBA.



de consolidación. La historia reciente muestra que la estabilidad de la democracia política como indicador de su consolidación es un concepto limitado.⁴¹

La institucionalización de las elecciones (junto con la ausencia de poderes de veto sobre las autoridades electas), tal la definición de Juan Linz ampliamente difundida en las ciencias sociales (*“the only game in town”*), es un concepto mínimo muy útil para algunas mediciones, pero muy poco explicativo de las actuales democracias, que todavía hoy bregan por superar la desigualdad, la exclusión social y la pobreza.

En Argentina, después del gobierno democrático de transición de Raúl Alfonsín, electo en medio de una euforia popular que ensalzaba las virtudes de la democracia representativa contra el terrorismo de Estado, los sucesivos gobiernos elegidos por el pueblo comenzaron o terminaron de modos normados pero no normales. A diferencia del pasado, las Fuerzas Armadas no tomaron el poder, sino que éste fue traspasado de un gobierno a otro según normas avaladas por la Constitución. No obstante, hubo alteraciones en el calendario electoral que son evidencia de las profundas crisis por las que atravesó el país en las últimas décadas.

En efecto, en los treinta años de estabilidad del régimen democrático transcurridos desde 1983, dos presidentes dejaron el cargo antes de vencer su mandato: Raúl Alfonsín en 1989, en medio de una severa crisis económico-financiera, adelantó las elecciones; y Fernando De la Rúa⁴², en diciembre de 2001, en medio de una crisis múltiple, después de una revuelta popular que dejó un saldo de 30 muertos por la brutal represión policial, abandonó el cargo. La apelación a la violencia estatal de 2001, aunque de otro signo, es un elemento de continuidad de la violencia como recurso político que también usaron los militares para presentar sus demandas ante el Estado en los primeros años de recuperación de la democracia. En efecto, hubo sucesivas asonadas entre 1987 y 1990, las cuales tuvieron como contraparte la vergonzosa abdicación por parte del Estado democrático de las consignas de Verdad y Justicia contra las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas y sus aliados civiles durante la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).

A la contabilidad de dos presidentes que dejaron el cargo antes de terminar el período del mandato debe añadirse la renuncia de un vicepresidente: en octubre de 2000, Carlos “Chacho” Álvarez, del FREPASO (Frente País Solidario, que hizo de la ética su consigna de campaña), dejó su cargo después de denunciar corrupción en el Senado. Pero sin duda, los momentos de mayor inestabilidad fueron los vividos con el estallido social de diciembre de 2001. A la cobarde renuncia de De la Rúa (que literalmente se escapó de la Casa de Gobierno en helicóptero), le siguieron cuatro sucesores en doce días: Ramón Puerta (designado presidente provisional, en su condición de presidente del Senado), Adolfo Rodríguez Saá (por el Partido Justicialista y nombrado por la Asamblea Legislativa con el objetivo de realizar una pronta convocatoria a elecciones), Eduardo Camaño (también designado interinamente, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados) y Eduardo Duhalde (senador y electo presidente interino por decisión del Congreso en pleno, con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003). Por añadidura, Rodríguez Saá debió renunciar siete días después de asumir el mando, por un complot palaciego de su propio partido, el Partido Justicialista, que adujo supuestas (o reales) intenciones del nuevo mandatario de postergar la

⁴¹ Los párrafos que siguen en esta sección retoman con modificaciones ideas antes expuestas en Ansaldi y Giordano (2012).

⁴² Electo en octubre de 1999, con el 48,5% de los votos, contra el 38% que obtuvo el candidato justicialista, Eduardo Duhalde. Lo acompañó en la fórmula Carlos “Chacho” Álvarez, del Frepaso.



acordada convocatoria a elecciones y ejercer el cargo hasta completar el período iniciado por De la Rúa (es decir, hasta el 10 de diciembre de 2003).

Finalmente, Duhalde despuntó como el gran estratega de la estabilización, pero su gobierno interino tampoco estuvo exento de violencia y de cambios en el cronograma de elecciones. En junio de 2002, fueron asesinados a manos de la Policía Mariano Kosteki y Darío Santillan, militantes populares de los movimientos sociales que con el estallido de 2001 quedaron en el centro de la escena política y que se habían organizado en reacción a las políticas neoliberales del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien había sido acompañado por Eduardo Duhalde, primero, desde la vicepresidencia y luego desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

El asesinato, en ocasión de una protesta pacífica, obligó a Duhalde a deponer toda expectativa reeleccionista y a anticipar el final de su interinato. Las elecciones, que estaban previstas para octubre de 2003, se adelantaron a abril de ese año. El santacruceño Néstor Kirchner, con el apoyo de Duhalde, fue el candidato para la sucesión. Sin obtener la mayoría de los votos, Kirchner debía enfrentarse en una segunda vuelta con Menem, pero éste abandonó la contienda al saberse virtual perdedor.⁴³ El 25 de mayo, Kirchner asumió la presidencia, y cortando marras con el duhaldismo, inauguró una nueva fase política en el país y puso en marcha casi inmediatamente una de las medidas más destacables de su proyecto reformista de gobierno. En efecto, hacia fines del año 2003, Kirchner ya había iniciado el descabezamiento de la cúpula militar y el recambio de la Corte Suprema de Justicia, dos instituciones que connotaban las abdicaciones de la década neoliberal menemista. Si bien es un dato constatable que gran parte de su base política en el Congreso y en las gobernaciones provinciales provenía de una estructura justicialista que era la que había sostenido la presidencia de Menem, el de Kirchner se presentó como un gobierno de cambio.⁴⁴

A mediados de junio de 2007, el presidente dio a conocer su decisión de no buscar la reelección. El Frente para la Victoria (FPV), el partido político que, desprendido del PJ, había sostenido su candidatura en las elecciones de 2003, lanzó la candidatura de su esposa, la entonces senadora Cristina Fernández, quien resultó electa para el período 2007-2011 y reelecta para el período 2011-2015. Entre uno y otro mandato, la inesperada muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010 provocó un fuerte simbronazo en la política nacional (y regional, pues encabezaba la UNASUR). Más allá de las múltiples cuestiones que de esto puedan derivarse, a los fines del argumento que intentamos desplegar aquí interesa señalar que la década kirchnerista inauguró un ciclo de elecciones realizadas según el calendario electoral previsto, de una reelección que superó la muerte del líder, y de una presidencia ejercida por una mujer que indudablemente llegó a ese cargo con el respaldo de su esposo, pero que pudo sostener su liderazgo a título personal después de la muerte de éste.

Democracia, ciudadanía política e igualdad de género

Una vez superada la Guerra Fría, Estados Unidos fundó su aspiración de hegemonía en la realización inminente de la Democracia y los Derechos Humanos. Este proceso mundial proveyó de un marco normativo de legitimidad para la incorporación en las agendas públicas nacionales de cuestiones antes levantadas por los movimientos de mujeres y el feminismo desde fuera del Estado.

⁴³ Los resultados de los comicios obligaron a una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados, Carlos Menem y Néstor Kirchner, que obtuvieron apenas 24,45% y 22,24% de los votos, respectivamente.

⁴⁴ A tal punto que su gobierno y su carisma fueron mentores de un nuevo “ismo” en las devaluadas tradiciones políticas argentinas: el kirchnerismo.



En el nivel internacional, tras la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por la ONU con sede en México, se declaró el año 1975 como Año Internacional de la Mujer, y a partir de allí el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985). En 1979, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En 1980, se organizó la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. El objetivo primordial fue evaluar el desarrollo del Decenio para la Mujer y aprobar un Programa de Acción para la segunda mitad del Decenio. En 1985, se realizó la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Nairobi y, en 1995, la Cuarta en Beijing. En estas instancias, se acordó promover los derechos humanos de las mujeres de cara al nuevo milenio. Al respecto, en 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en Viena, reconoció por primera vez la violencia contra las mujeres y la discriminación por género como violaciones a los derechos humanos. En el nivel regional, en junio de 1994, por iniciativa de la Comisión Interamericana de la Mujer (CIM), se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que se conoce como Convención de Belem do Pará.

La traducción de estas iniciativas en políticas y medidas concretas en los escenarios nacionales de los países de América Latina ha sido variable. En Argentina se creó la Secretaría de la Mujer (1987), dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social; el Consejo Nacional de la Mujer (1992); el Gabinete de Consejeras Presidenciales (1993); el Directorio y el Consejo Federal de la Mujer (1995) en reemplazo del Gabinete. En general, la ratificación de los acuerdos internacionales y la creación de organismos del Estado especializados en el ámbito nacional permitieron al Estado argentino avanzar en la formulación de leyes que atendían reclamos históricos de los movimientos de mujeres y feministas.

Asimismo, durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI ha tenido lugar una transformación del orden social en la cual las mujeres han pasado de ser “ciudadanas incapaces” a sujetos de “igualdad de derechos” (Giordano, 2012). En Argentina, en 1947 las mujeres accedieron a la condición de ciudadanas políticas, pero al no estar todavía habilitadas jurídicamente como personas con capacidad civil plena fueron durante largo tiempo ciudadanas incapaces. La condición de capacidad civil plena fue reconocida en 1968, luego reforzada en los años de la transición democrática con las leyes de patria potestad compartida (1985) y de divorcio vincular (1987). A partir de la reforma de la Constitución (1994), y la incorporación en dicho texto de los tratados internacionales de Derechos Humanos, la idea de ciudadanía como estructura pretendidamente “universal” de contención de derechos fue seriamente cuestionada.⁴⁵ Desde entonces, puede decirse que las luchas sociales se concentraron, antes que en la incorporación en dicha estructura, en el reconocimiento de derechos específicos que se inscriben en el paradigma de la “igualdad de derechos”.

En este marco, la década neoliberal no favoreció el avance en la legislación más allá de los logros obtenidos en medio del fervor de la democratización, con las modificaciones en las relaciones jurídicas de la familia ocurridas en 1985 y 1987. Los organismos de mujeres creados durante la década menemista cayeron al vacío, bajo el signo del desfinanciamiento y la despolitización propias del neoliberalismo dominante.

Las innovaciones significativas ocurrieron muy recientemente: la sanción de la Ley de

⁴⁵ Véase por ejemplo la crítica de Manuel Antonio Garretón al Informe del PNUD 2004 “La democracia en América Latina”. Disponible en: http://www.undp.org.ni/files/doc/Contribuciones_Debate_Completo.pdf.



Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de 2009, la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo de 2010, también conocida como Ley de Matrimonio Igualitario, y la Ley de Identidad de Género de 2012, que entre otras cosas permite cambiar el sexo que figura en el documento de identidad en forma gratuita y sin necesidad de orden judicial.

Ahora bien, para entender esta gestión de derechos de cuño “kirchnerista”, que refieren al paradigma de igualdad de derechos, y que redundan en una igualdad de género, no puede o no debe soslayarse la reflexión sobre cómo funciona la democracia y cómo se practica la ciudadanía política en Argentina. Esto nos devuelve a las líneas trazadas al comienzo de este texto, y en particular a la perspectiva de análisis sobre el kirchnerismo a la cual invita el pensamiento del sociólogo Sidicaro. Al respecto, es preciso señalar que la desarticulación del campo político que el autor señala ocurrió en un escenario en el cual antes de la debacle neoliberal importantes leyes habían permitido el empoderamiento de las mujeres.

Recordemos que aprobadas las leyes de patria potestad compartida y divorcio vincular, Argentina avanzó pioneramente en materia de ampliación de la ciudadanía política para las mujeres. En efecto, antes de que la década neoliberal arrasara con las conquistas en varios planos de la ciudadanía (masculina y femenina; tanto civil, como política y social), el mundo conoció una tercera “ola” de democratización.⁴⁶ En consonancia con ella, a fines de los años ochenta, en Argentina, se planteó por primera vez la necesidad de incluir cuotas de género para la integración de las listas de candidatos a cargos partidarios y legislativos.⁴⁷ Esta iniciativa finalmente desembocó en la sanción de la denominada Ley de Cupo en 1991.⁴⁸ El concepto de “cupos” o “cuotas” entraña no sólo la dimensión de sufragio sino también la de representación y participación en las estructuras partidarias.

Marx, Borner y Caminotti (2007) señalan que mientras que en 1983, había sólo 11 diputadas electas de 254 bancas que tenía la Cámara baja (4,3 % del total), en 1993, primera vez que se aplicaba la Ley de Cupo, el número ascendió a 32, de un total de 257 escaños (12,4 % del total). Respecto del Senado, las autoras señalan, en el mismo estudio citado, que en 2001, primera vez que se aplicaba la Ley de Cupo en esa Cámara, de 72 bancas, las mujeres ocuparon 25 (cerca del 39 % del total). En 2010, según mediciones del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL), el promedio de mujeres electas en los parlamentos en Argentina era de 39%. Según el mismo documento, “la región tiene un promedio de representación parlamentaria de mujeres del 23%”. Así, Argentina se sitúa bastante por encima de la media, y lejos de otros países como Chile (14%) y Brasil (9%).⁴⁹

⁴⁶ Recordemos que Therborn (1992) identifica la tercera “ola” de democratización con la caída de los regímenes de partido único de los países comunistas de Europa del Este en 1989-1991. Según el sociólogo sueco, esto marcó el agotamiento del comunismo como vehículo de la modernidad socio-económica (una de las “vías” señaladas en 1966 por Barrington Moore).

⁴⁷ Fue en el Congreso Nacional de Mujeres de la UCR, reunido en octubre de 1989 en Santiago del Estero. La cuota estipulada fue 35 por ciento. En noviembre de ese año se presentaron dos proyectos en el Congreso (Marx, Borner y Caminotti, 2007: 59-60).

⁴⁸ La Ley N° 24.012, sancionada en 1991, fijó la obligatoriedad de un mínimo de un 30 por ciento de mujeres en las listas de los partidos políticos, en proporciones con posibilidad de resultar electas. Se aplicó por primera vez en las elecciones para la Cámara de Diputados de 1993. En el Senado, recién se puso en práctica en 2001.

⁴⁹ “Informe anual 2011. El salto de la autonomía. De los márgenes al centro”, Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe (OIG), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Aunque hoy son trece los países latinoamericanos que aplican leyes de cuotas o de paridad, los avances han sido desparejos y no siempre con resultados efectivos en el sentido de consolidar la ciudadanía política femenina, tanto en su dimensión de sufragio como de representación (Archenti, 2011). No obstante, cada vez más mujeres participan en la formulación y ejecución de las políticas públicas, con actuación en los Congresos, en las Legislaturas y en el Poder Judicial, y con altas posiciones de gobierno, como presidentas de Bancos Centrales, embajadoras, ministras, viceministras y directoras de importantes empresas públicas y, más notablemente, como presidentas y vicepresidentas de la República.

Esto último es, en efecto, un dato que ha llamado la atención de muchos analistas: desde 1990, ha aumentado el número de mujeres en el Poder Ejecutivo. Después de las truncas presidencias de Isabel Perón en Argentina (1974-1976) y de Lidia Gueiler Tejada (presidenta interina) en Bolivia (1979-1980) —ambas depuestas por golpes de Estado que iniciaron las más sangrientas dictaduras en sus respectivos países—⁵⁰, desde los años noventa han ocupado la presidencia (por orden cronológico): Ertha Pascal-Trouillot (presidenta provisional) en Haití (1990-1991); Violeta Chamorro en Nicaragua (1990-1997), Rosalía Arteaga en Ecuador (1997), Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004), Michelle Bachelet en Chile (2006-2010), Cristina Fernández de Kirchner en Argentina (2007-2011 y reelecta para un nuevo período), Laura Chinchilla en Costa Rica (desde 2010, en funciones) y Dilma Rousseff en Brasil (desde 2011, en funciones).⁵¹

Si en la Conferencia de México por el Año Internacional de la Mujer (1975), Argentina fue el único país latinoamericano que tenía una mujer al frente del Estado, a partir de los años noventa la situación fue evidentemente otra.

De la lista consignada más arriba, se destacan tres mujeres presidentas: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011, con mandato renovado por reelección hasta 2015), Michelle Bachelet (2006-2010) y Dilma Rousseff (2011-en ejercicio). En los tres casos, su ascenso al Ejecutivo está asociado a contextos en los que se dieron oportunidades históricas, como el hecho de representar la continuidad de gobiernos exitosos, el de Néstor Kirchner, el de Ricardo Lagos y el de Ignacio “Lula” da Silva, respectivamente.

En Argentina, el 27 de octubre de 2010 murió el ex presidente Néstor Kirchner. El pueblo, masivamente, lo despidió en las calles, dando señales de un consenso social que contribuyó en mucho al amplio triunfo (54% de los votos) de Cristina Fernández en las elecciones de 2011, que le permitió renovar su mandato.

Incluso en las visiones críticas del supuesto adelanto para las mujeres que las presidencias femeninas entrañan, como la de Liliana De Riz, es un factor destacado que “la carrera política de la presidenta no se inauguró entonces [con la designación por su esposo y entonces presidente, en tanto

⁵⁰ Se trata de dos trayectorias personales muy disímiles. María Estela Martínez de Perón (“Isabelita”) era una *outsider* de la política, que acompañó a su esposo en la fórmula presidencial y que asumió la presidencia cuando este falleció. Lydia Gueiler Tejada inició su militancia en los años cincuenta, de la Revolución Nacional, y continuó su militancia en los años posteriores. Cuando asumió la presidencia, era diputada nacional y fue electa por el Congreso en pleno en una situación de crisis e inestabilidad política que desembocó en la sangrienta dictadura de Luis García Meza.

⁵¹ Tres de estas presidentas mujeres eran viudas de prominentes figuras de la política nacional (“Isabelita” viuda de Perón; Violeta Chamorro, viuda de Pedro Chamorro —una y otra incluso llevan el apellido de sus maridos—; Moscoso viuda de Arnulfo Arias). Por su parte, las mujeres que ocuparon la presidencia en Bolivia, Haití y Ecuador lo hicieron efímeramente: por un período menor a un año.



variante de reelección conyugal], venía de más lejos y se había forjado en cargos electivos, como diputada primero y como senadora, después, a lo largo de los años de la democracia recuperada” (De Riz, 2011: 5). Este dato no es independiente y ajeno a la democratización del ejercicio del poder político que, con sus límites, significó la Ley de Cupo.

Según la evaluación de Jutta Marx, Jutta Borner y Mariana Caminotti (2007), la aplicación del cupo femenino ha sido variable y ha tenido limitaciones en función de los distintos sistemas electorales en los que se ha enmarcado. Pero es igual de cierto que ha sido un mecanismo de integración de las mujeres en la vida pública en general.

Así, Argentina se presenta como un caso muy peculiar. Se observa que desde el inicio del ciclo kirchnerista, las políticas que han promovido la igualdad de género fueron elaboradas en su mayoría bajo una presidencia femenina, que nunca comulgó con las luchas feministas y que se ha empeñado en el uso (sino abuso) de la tradicional retórica peronista del culto al líder varón. ¿Es entonces la condición de mujer de la persona presidente el factor que explica esta circunstancia de adelanto para los derechos de igualdad de género?

En líneas generales, para el caso de Argentina, pero para los otros casos de presidencias femeninas también, cabe decir que es demasiado pronto para evaluar la magnitud de los cambios que pueden traer aparejados los liderazgos de mujeres en el Ejecutivo respecto del modo de ejercicio del poder político y su impacto en la construcción de una agenda de gobierno con perspectiva de género. Pero una cosa es fehaciente. Es retrógrado pensar que por ser mujeres, las presidentas (las actuales y las venideras) serán naturalmente proclives a ejercer el poder político a favor de la condición femenina. En resumen, es evidente que “no necesariamente se promueven políticas de igualdad de género cuando es una mujer la que está en el poder” (Fernández Ramil y Oliva Espinosa, 2012: 133). La explicación entonces tiene que estar en otro lado.

Cuando en 1987 se aprobó la ley que estableció el divorcio vincular, éste se erigió sobre la base de una legislación que con pasos lentos y muy tímidos había avanzado en la aceptación de que el matrimonio no era un instituto exclusivamente normado por el amor romántico. También la opinión pública, a través de revistas especializadas y medios de comunicación en general, y el Congreso, a través de numerosos proyectos legislativos, avalaban la necesidad de legislar sobre el divorcio vincular (Cosse, 2009). En los años ochenta, el fervor de la democratización en curso fue marco de legitimación suficiente para convertir la reivindicación en ley. La sanción de la ley de divorcio de 1987 fue un paso inicial hacia la democratización de las relaciones sociales sexuadas (Pecheny, 2009). Puede pensarse, en la misma línea de argumentación, que la sanción de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo de 2010 la reafirmó de modo contundente y con efectos todavía hoy en proceso de asimilación.

Como señalan, entre otros, Jones y Vaggione (2012: 523), “desde la década de 1990, la histórica consigna del feminismo ‘lo personal es político’ ha penetrado en la construcción del campo político en América Latina, al lograrse que las formas de regular la sexualidad y la reproducción sean materia de debate público”. En este contexto, con la consigna “los mismos derechos con los mismos nombres”, un grupo de activistas luego reunido en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), comenzó una lucha cuyo eje sería la “igualdad de derechos”.

Un elemento que contribuye a la explicación de cómo penetran en el “campo político” consignas relativa a la igualdad de género, como la Ley de Matrimonio Igualitario, o antes, la Ley de Cupo, es precisamente aquello que agudamente señala el sociólogo Sidicaro para la comprensión del



fenómeno del kirchnerismo: la “desarticulación del campo político”. Así, la baja institucionalización de los partidos políticos ha ofrecido un contexto de oportunidad para la que las mujeres de todo el arco político se unieran y presionaran en pos de la promoción de una Ley de Cuotas o para que los movimientos LGBTs se unieran y presionaran en pos de una Ley de Matrimonio Igualitario, y para que, en ambos casos, las propuestas pasaran exitosamente por el Congreso con su aprobación.

Esto no significa negar el peso de otras variables explicativas, muy señaladamente, el peso de la lucha de los organismos multilaterales por la conquista de derechos para las mujeres. Así, las conferencias organizadas por la ONU, que mencionamos más arriba, fueron un eslabón importante en la cadena explicativa. Pero si se pone el foco en los avances en los niveles nacionales, sin duda las leyes que otorgaron mayores grados de igualdad a las mujeres y los varones en el seno de la familia y las leyes de cuotas en el ámbito de la participación política han sido factores cruciales en el camino hacia el reconocimiento de la igualdad de derechos con perspectiva de género (Htun y Piscopo, 2010).

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, se incorporaron tres ministras al Gabinete Nacional, dos de ellas en ministerios que han sido típicamente masculinos: en el Ministerio de Defensa, Nilda Garré; en el Ministerio de Economía, Felisa Miceli; y en el Ministerio de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Asimismo, la vicepresidencia de la Corte Suprema correspondió a una mujer: Elena Highton de Nolasco. Bajo la presidencia de Cristina Fernández, se sumaron más mujeres en cargos jerárquicos en el Estado: Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central y Alejandra Gils Carbó en la Procuración General de la Nación.

Si se mira con atención la biografía y la labor de gestión de estas mujeres (una cuestión que excede a los objetivos de este texto y sobre lo cual señalaremos apenas un punto), el cuadro resultante permite sostener (como antes sostuvimos respecto de las mujeres presidentas) que la presencia de mujeres en los ministerios por sí sola no garantiza la igualdad de género. El caso de la ministra Garré es un buen ejemplo. Ella creó un departamento de género y revocó la norma que permitía desvincular de las Fuerzas Armadas a las mujeres embarazadas (Htun y Piscopo, 2010). Pero esta medida se inscribe en una trayectoria política sensible a la igualdad de género. No era la primera vez que Garré se involucraba en la gestión de derechos a favor de las mujeres. Ya en los primeros años setenta había presentado un proyecto al Congreso sobre patria potestad compartida, que había sido fundamento para la elaboración de un nuevo proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras pero rechazado por el veto de la entonces presidenta Isabel Perón (Giordano, 2010).

No obstante, las sensibilidades individuales no son ni suficientes ni deseables como único factor de cambio. Htun y Piscopo (2010: s/n) señalan que “la conexión entre presencia femenina y empoderamiento de las mujeres depende no solo de tener una masa crítica en los cargos políticos sino también de las creencias sociales y los arreglos institucionales que estructuran sus oportunidades para actuar efectivamente”. A su vez, el Informe 2011 del Observatorio de Igualdad de Género ya citado, sostiene que “uno de los desafíos que enfrentan los mecanismos para el adelanto de la mujer es el de poder seguir avanzando en la institucionalización de la transversalización de género, en el sentido de que el enfoque de género permee profundamente las culturas institucionales más allá de las personas o equipos responsables en cada repartición estatal”. En efecto, y volviendo a la argumentación de Sidicaro, “los personalismos” son “sustitutos pobres y precarios de los partidos organizados” (Sidicaro, 2011: 94). El fortalecimiento de los partidos políticos es un elemento necesario para reafirmar el carácter deliberativo de la democracia.

Como muchos autores han reconocido, las leyes de cuotas han sido un instrumento crucial para el adelanto en materia de igualdad de género, y si bien el saldo de la aplicación de dicha ley en Argentina, en un contexto de crisis del sistema político, ha resultado positiva en virtud de la posibilidad de aprovechamiento de oportunidades históricas que trajo la coyuntura, la profundización del cambio en el largo plazo no reside ni en los personalismos ni en el fortalecimiento de los partidos



en un sentido retrógrado (de fortalecimiento de sus estructuras tradicionales y patriarcales) sino en la densidad institucional de una sociedad civil que asuma como programáticas las cuestiones de igualdad de derechos y la igualdad de género.

Es evidente que “a pesar del impacto democratizador que significa la llegada de una mujer al Poder Ejecutivo, esto no siempre se expresa en avances sustantivos en la transformación de instituciones políticas que permitan mejorar la calidad de la democracia” (Fernández Ramil y Oliva Espinosa, 2012: 133). Para poner el ejemplo tal vez más elocuente de la demora en la atención a reclamos de las mujeres, reclamos que datan nada menos que de principios de siglo XX, observemos la cuestión de la despenalización del aborto.

La negativa a dicha despenalización, entre otras razones, viola la igualdad de derechos en tanto son las mujeres pobres las que mayormente se someten a abortos en condiciones inseguras. Convicciones personales de Cristina Fernández de Kirchner, el peso de la Iglesia católica y los costos electorales de una ley fuertemente resistida en toda la región han mostrado ser un límite para una fuerza política como el kirchnerismo que, en otros planos, ha llevado adelante transformaciones pioneras: en los últimos años, a la sanción de la ley de matrimonio igualitario (después de Canadá, Argentina fue el primer país de América que tuvo una ley tal) se sumó la ley de identidad de género.⁵²

Conclusiones

Antes que conclusiones derivadas rigurosamente de la línea de razonamiento seguida hasta aquí, este último apartado propone volver sobre algunas cuestiones tratadas a lo largo del texto que merecen ser subrayadas para concluir este balance de treinta años de democracia con perspectiva de género que venimos de ensayar.

El cuadro que trazamos respecto de la democracia, la ciudadanía política y la igualdad de género resulta menos generoso respecto de la ponderación de los avances en materia de derechos de las mujeres que aquel que toma aisladamente los elementos que lo constituyen: las “mujeres excepcionales” en “lugares excepcionales”, según la expresión de la feminista Diana Maffía.

El dato cuantitativo (cuántos puestos están ocupados por mujeres) es útil para medir la presencia de las mujeres en el gobierno de un Estado, pero no para analizar la promoción de políticas de igualdad de género y la distribución del poder entre varones y mujeres en el ejercicio de la democracia. Para ello resulta más útil atender a la estructura de los partidos políticos, su nivel de institucionalización y las posiciones ideológicas de cada uno. En este sentido, como sostiene Sidicaro, la sobredeterminación de las crisis superpuestas, entre las cuales la del sistema de partidos reveló ser la de efectos más persistentes, es un elemento crucial. Muchos de los avances en materia de igualdad de derechos se han conseguido gracias a (y a pesar de) la desarticulación del campo político que permitió sortear la inercia de los partidos tradicionales frente al avance en derechos fuertemente

⁵² La evaluación del avance y las deudas de nuestro país respecto de la igualdad de derechos debe despojarse de miradas que reproducen el colonialismo intelectual que impide poner en perspectiva histórico-estructural el caso nacional y olvida su inserción en el sistema-mundo. Como se ha dicho, Argentina fue un país pionero en materia de ley de cuotas: en Brasil hubo una ley semejante en 1997. Pero fuera de América Latina la realidad no fue muy distinta. En Francia, por ejemplo, la ley de paridad se estableció recién en 1999, ante la presión de las mujeres de revertir las bajas posibilidades de acceso a los cargos representativos. La comparación con otros países de Europa permite cuestionar algunas afirmaciones repetidas tantas veces que sitúan a América Latina como un caso “tardío” o “atrasado” en el ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. En Francia, la Ley de Voto Femenino data de 1944 y la Ley de Paridad de 1999.



resistidos y potenció el personalismo como pauta de ejercicio del poder político, a veces, como en el caso de la ministra Garré, facilitador del avance en derechos iguales para varones y mujeres.

No obstante, es innegable que la presencia de mujeres en el Poder Ejecutivo es un elemento insuficiente para un cambio duradero y con perspectivas de profundización. Al respecto, según la evidencia mostrada a lo largo del texto respecto de las políticas de los gobiernos kirchneristas y sus ministerios en relación con la igualdad de género, la tesis de Stiegler (2009: 14) sigue siendo un modo inteligente de mirar el asunto: “las expectativas en cuanto a impacto en términos de política de género sólo son posibles si la mujer que ocupa el espacio de poder ha tenido experiencias de género específicas, si les otorga una interpretación política y no individual y si cuenta con un espacio programático para cuestiones de género en su partido, que abogue por la transformación de las relaciones de género”.

La interpretación política de las experiencias individuales es un gran desafío de nuestra democracia. Y crucial para una transformación profunda, relaciones de género incluidas.



Bibliografía

- Ansaldi, Waldo y Verónica Giordano (2012): *América Latina. La construcción del orden*. Buenos Aires, Ariel.
- Archenti, Nélica (2011): “La paridad política en América Latina y el Caribe. Percepciones y opiniones de los líderes de la región” en Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, N° 108.
- Cosse, Isabela (2009): “Una cultura divorcista en un país sin divorcio: Argentina en los años sesenta”, en XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Bariloche, Universidad del Comahue, octubre.
- Fernández Ramil, María de los Ángeles y Daniela Oliva Espinosa (2012): “Presidentas latinoamericanas e igualdad de género: un camino sinuoso”, en Revista Nueva Sociedad, N° 240, julio-agosto. Disponible en www.nuso.org.
- Giordano, Verónica (2010): “María Florentina Gómez Miranda y 'la lucha denodada de la mujer argentina por sus derechos'”, en Adriana Valobra, editora, *Mujeres en espacios bonaerenses*, EDULP, La Plata.
- Giordano, Verónica (2012): *Ciudadanas Incapaces. La construcción de los derechos civiles de las mujeres en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX*, Teseo, Buenos Aires.
- Htun, Mala y Jennifer M. Piscopo (2010): “Presence without Empowerment? Women in Politics in Latin America and the Caribbean”, Paper prepared for the Conflict Prevention and Peace Forum, December.
- Jones, Daniel y Juan Marco Vaggione (2012): “Los vínculos entre religión y política a la luz del debate sobre matrimonio para parejas del mismo sexo en Argentina”, en *Civitas*, Vol. 12, N° 3, Porto Alegre, septiembre-diciembre, pp. 522-537.
- Marx, Jutta; Borner, Jutta; y Mariana Caminotti (2007): *Las Legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires.
- Pecheny, Mario (2009): “Parece que no fue ayer: el legado político de la Ley de Divorcio en perspectiva de derechos sexuales”, en Gargarella, Roberto; Murillo, María Victoria y Mario Pecheny, compiladores, *Discutir Alfonsín*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, pp. 85-113.
- Sidicaro, Ricardo (2011): “El partido peronista y los gobiernos kirchneristas”, en *Revista Nueva Sociedad*, N° 234, julio-agosto. Disponible en www.nuso.org.
- Stiegler, Barbara (2009): “Lo decisivo: ¿que sea mujer? Cómo se vinculan género y política: el caso de la Canciller alemana”, en Stiegler, Barbara y Elisabet Gerber, *Género y poder. El significado del género en los más altos cargos políticos: los casos de Alemania, Chile, Argentina y España*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Frankfurt.
- Therborn, Göran (1992): “The Right to Vote and the Four World Routes to/through Modernity”, en Torstendahl, Rolf (ed.), *State Theory and State History*, Sage, London, pp. 62-92.